

Juanma Barrios

Hacia un Estado plurinacional

Los tiempos cambian, los discursos no tanto. Que los problemas nacionales existen es una realidad que apareció en Europa de la mano de las revoluciones liberales y a la que es inútil dar la espalda. En la Transición española algunas organizaciones obreristas, de corte comunista o anarcosindicalista, quisieron desentenderse del problema en nombre del internacionalismo proletario. No por negarlo, el complejo conjunto de fenómenos que se etiqueta como cuestión nacional desapareció. Otras organizaciones, por el contrario, se implicaron mucho en las problemáticas nacionales, muy marcadas por su reacción contra el franquismo y deslumbradas por la fuerza del independentismo vasco. En estos colectivos era fácil encontrar acusaciones indiscriminadas de españolismo que alcanzaban a la propia izquierda “reformista” que abogaba por el federalismo. Afirmaban que España era “una cárcel de naciones” y que los distintos pueblos que la componían debían acceder sin coacciones al derecho de autodeterminación, un derecho que se consideraba democrático e inalienable. Al “café para todos” respondían en la práctica con la consigna “autodeterminación para todos”.

¿Pero cuáles eran los pueblos que debían ejercer la autodeterminación? A esta pregunta no se daba una respuesta siempre clara. Podía observarse que al País Vasco se le unía Navarra sin muchas consideraciones hacia la mayoría hostil o indiferente al nacionalismo vasco. En Cataluña el problema provocaba divisiones profundas en el nacionalismo catalán, porque unos hablaban de Países Catalanes mientras que para otros Catalunya incluía Baleares, el País Valenciano y la franja oriental aragonesa sin más matices. En Galicia los nacionalistas eran a la par que soberanistas respecto a España, reintegracionistas con Portugal en el terreno lingüístico, pero al final triunfó la opción partidaria de una normalización aislacionista de la lengua gallega, o sea, se dio por válida su elevada castellani-

zación. Las Islas Canarias, por eso de estar cerca de África, eran equiparadas por algunos a un territorio pendiente de descolonización. El carácter colonial de Andalucía era denunciado por el Sindicato de Obreros del Campo, pero no por otras organizaciones, aunque todas daban por hecho que era una nación tras las masivas movilizaciones autonomistas que hubo hasta 1981. También en Asturias, “elevada” a categoría de nación, algunos colectivos promovían el uso del minoritario asturiano, sobre cuyo carácter de idioma diferente del español había un debate; similar situación se daba con la casi testimonial fabla aragonesa. Castilla, fragmentada en varias comunidades, sería otra nación cuyos límites nunca acababan de estar claros. Regiones como Murcia o Extremadura eran repartidas entre Castilla o Andalucía, o quedaban en el limbo...

No quiero caricaturizar estas posiciones, porque a la complejidad del tema no escapaban los partidos de la izquierda reformista y los de derechas —baste pensar en el elevado número de partidos regionalistas conservadores que han aparecido en las tres últimas décadas—. Pero sí quiero dejar claro que es preocupante ver cómo hoy ciertas organizaciones independentistas o de la izquierda radical siguen apegadas a discursos y análisis elaborados en la coyuntura de los años setenta, cuando la crisis del modelo centralista de la Dictadura planteaba un escenario abierto y daba pábulo incluso a las posiciones más pintorescas.

Si durante la dictadura de Franco se comparaba con justicia a España con una cárcel de naciones y en estas circunstancias se llegó a la Transición, a finales de los años ochenta el proceso autonómico había introducido los suficientes cambios como para mantener aún tal consigna. Es más, los movimientos nacionalistas estaban en pleno declive, con la excepción de los casos vasco, catalán y gallego. Sin embargo, la descomposición del bloque soviético y los numerosos procesos de autodeterminación e independencia que se desarrollaron a continuación en Europa Central y Oriental, revalorizaron el nacionalismo como ideología antisistema, mientras los planteamientos marxistas perdían prestigio...

Hoy, en vísperas del veinte aniversario de la desaparición del Pacto de Varsovia, el panorama que nos encontramos en España no es precisamente el que previeron los decepcionados del comunismo. Los procesos de autodeterminación quedaron limitados al antiguo bloque soviético, pues las circunstancias de su descomposición nada tenían que ver con la realidad de una España en crecimiento económico y plenamente integrada en la Unión Europea y la OTAN. Si algún nacionalismo ha crecido con verdadera fuerza en los últimos lustros ha sido el español, que sólo ha encontrado una firme resistencia en las comunidades autónomas vasca y catalana, y en menor medida en la gallega. Por el contrario, aunque la renta per cápita española ha aumentado de manera notable, las desigualdades sociales también lo han hecho y el capitalismo ha entrado en una crisis que vuelve a poner de actualidad en Europa la conveniencia de buscar una alternativa. Todo ello en el marco de un cambio climático que no respeta fronteras.

Anquilosados. Ante una realidad distinta, disimétrica y en continua evolución, las formaciones políticas que se reclaman en alguna medida marxistas no pueden permanecer encastilladas en los viejos análisis de la Transición. Bajo las hermosas palabras de firmeza y coherencia en los principios, algunos mantienen hoy posturas sobre la autodeterminación tan poco fructíferas como las de aquellos estalinistas que se negaban a ver la crisis del “socialismo real”. Si en 1977 el derecho a la autodeterminación debía ser una prioridad después de cuatro décadas de brutal centralismo, hoy, tras treinta años de régimen autonómico el problema tiene que plantearse de una manera diferente, porque las realidades jurídicas y sociales han cambiado profundamente. En un mundo donde existen poco más de 200 Estados, se hablan 6.000 idiomas y hay unas 2.000 etnias, en un contexto político en el que los Estados poderosos avasallan a los débiles, donde decenas de países están asolados por conflictos étnicos, y con el ejemplo de una Latinoamérica donde la izquierda lucha por crear lazos de unidad frente a oligarquías que apuestan por la desintegración, hace falta ser muy prudente y restrictivo cuando se habla de autodeterminación.

En círculos nacionalistas e incluso marxistas se ha hablado con demasiada ligereza del derecho a la autodeterminación como un derecho universal, comparable a otros derechos humanos, que debiera ejercerse sin restricciones ni coacciones. Pero el derecho a la autodeterminación es demasiado impreciso y abstracto, pues deben ejercerlo comunidades que rara vez son homogéneas y cuyas fronteras no siempre coinciden con las divisiones administrativas. Así, cuando lo llevamos a la compleja realidad aparece la mayoría de las veces impracticable o genera tantos problemas como pretende solucionar. A Rosa Luxemburgo no le faltaba algo de razón cuando lo descalificaba como “*derecho metafísico*”.

Los colectivos que reclaman la autodeterminación o directamente la independencia se apoyan las más de las veces en lecturas sectarias del pasado que para alguien que se reclama marxista son inaceptables. En ellas se hacen cribas para recoger aquellos hechos del pasado que justifican el proyecto político presente, mientras que se desprecian o malinterpretan los acontecimientos que no encajan en la visión de un pueblo “profundamente distinto y combativo contra los ocupantes”. Así, en muchas organizaciones nacionalistas de la izquierda radical no hay una voluntad de conocer el pasado para actuar con más lucidez en el presente, sino una construcción histórica plagada de mitos que, más que ayudar a comprender, sólo contribuye a distorsionar la realidad y distanciar a los activistas políticos de aquellas personas que no hacen el acto de fe de aceptar tales mitologías. De la aspiración de un socialismo científico se retrocede a una concepción tradicionalista y romántica del pasado; ¿qué proyecto de futuro racional y progresivo se puede elevar sobre ello?

España nunca ha sido un estado homogéneo culturalmente, pero tampoco lo eran la Corona de Castilla, la Corona de Aragón y el reino de Navarra en el siglo XV. Ningún debate sobre historia da la razón completa a nadie cuando entramos

en este largo proceso histórico que arranca de los tiempos medievales y en el que varios pueblos han coexistido, las más de las veces pacíficamente, durante tantos siglos. Es indudable que el proyecto de Estado-nación del liberalismo intentó borrar del mapa las lenguas minoritarias y que gobernó el país con un agresivo centralismo. Ésta es precisamente la actitud que hay que derrotar. Pero lo correcto desde la perspectiva de los que aspiran al socialismo, en mi opinión, es lograr una coexistencia razonable de los pueblos que componen el Estado español y enfrentar juntos la resolución de los problemas sociales y medioambientales a los que nos enfrentamos, en lugar de apostar por los secesionismos —que incluyen la confrontación étnica y el interclasismo— con la excusa inverosímil de que por separado será más fácil resolver luego esos problemas. La derecha católica y neo-liberal encarnada por el Partido Popular no es un problema de Madrid que deben soportar las comunidades periféricas, sino una realidad presente en todas ellas, en algunas de las cuales también tienen otras derechas que como Convergencia i Unió o Coalición Canaria no son males menores.

Proyectos de construcción nacional y correlación de fuerzas. Para justificar sus demandas independentistas los nacionalistas andaluces suelen remontar los orígenes de la “nación andaluza” hasta Tartesos, ven la provincia Bética como una realidad autónoma en el Imperio romano, se identifican con los mozárabes durante la historia de Al-Andalus y con los moriscos tras la caída del Reino de Granada. Destacan también la crisis de 1640, en la que hubo una insignificante conspiración nobiliaria que no llegó a nada, y pasan de puntillas por hechos cruciales como el apoyo de Andalucía a los Borbones en la guerra de Sucesión o el fuerte respaldo a la revolución liberal a partir de 1833. Es cierto que el centralismo del régimen isabelino provocaría en 1873 una reacción en Andalucía, pero fue cantonalista y dudo que incluso quepa calificarla de protonacional. El regionalismo/nacionalismo andaluz empezó a definirse a principios del siglo XX y, en medio de la indiferencia de las organizaciones de masas obreras, acabó por formular un discurso relativamente coherente y tuvo la fortuna de crear una bandera y un himno. El asesinato de Blas Infante por los golpistas en el verano de 1936 puso fin a todo movimiento nacionalista hasta la Transición. Fue precisamente la crisis de la Dictadura y la reacción contra el opresivo centralismo del régimen la que permitió que el proyecto de Blas Infante fuera retomado por la mayoría de la izquierda y acogido por movilizaciones de masas entre 1977 y 1981. El principal logro fue un Estatuto de Autonomía con mayores competencias de las inicialmente previstas por el Estado español. Tras esta conquista las movilizaciones cesaron y la única fuerza nacionalista con base electoral capaz de llegar al parlamento andaluz, el Partido Andalucista, se transformó en un partido regionalista conservador que con los años ha declinado hasta perder toda representación parlamentaria. Desde hace un cuarto de siglo no ha habido movilizaciones soberanistas y cuando recientemente se celebró un referéndum para la

reforma del Estatuto de Autonomía, éste fue aprobado sin debates apasionados ni tensiones de ningún tipo. A la vista de este pasado en el que las luchas soberanistas brillan por su ausencia salvo en un periodo muy concreto y ya lejano, ante la evidencia de que no hay un nacionalismo significativo organizado y los andaluces se sienten cómodos dentro de España con su actual grado de autonomía, ¿tiene sentido una demanda de autodeterminación? ¿Donde no hay un problema nacional puede y debe la izquierda esforzarse en crearlo?

Muy distinto al andaluz es el caso de Cataluña, que sí tenía a sus espaldas una larga trayectoria de confrontaciones con el Estado central y una fuerte conciencia nacional, aunque los centralistas quisieran subestimarlos. Durante la victoriosa ofensiva de los ejércitos franquistas sobre Barcelona en febrero de 1939, un periódico falangista con el elocuente nombre de *Patria* celebraba de esta manera los avances: “*El problema catalán no existe. El problema catalán se reduce cada día en unos cuantos kilómetros: los que dispone el incomparable genio militar del Caudillo*”. Añadía el diario que si el problema catalán no se resolvía más rápido era porque “*el peso de las mochilas*” impedía avanzar a los soldados a mayor velocidad. En fin, por la simple fuerza de las armas creían los fascistas que podían resolver en días un problema político con una sólida tradición de luchas y un fuerte enraizamiento social. Ante la evidencia de que el catalanismo no se evaporó con la llegada de las bayonetas franquistas, durante toda la Dictadura se trabajó activamente en la persecución de una lengua castigada ya por seculares discriminaciones.

La crisis de la Dictadura abrió un abanico de posibilidades: la continuidad del centralismo defendida por la extrema derecha; un autogobierno con distintos alcances según quiénes lo propusieran; y la independencia. Bien sabemos que la Constitución “que nos dimos” se hizo bajo la sombra de los sables en 1978 y que el Estatut ha sufrido este lastre antidemocrático. Pero tampoco podemos ocultar que el independentismo radical no logró impulsar una fuerza política creíble y quedó en situación extraparlamentaria desde la Transición. Esto no debe atribuirse sólo a las numerosas divisiones internas, sino a la falta de una suficiente base social. Aunque ERC pasó su propia travesía del desierto al tener durante muchos años una presencia institucional modesta, ha sido capaz de remontar el vuelo cuando una parte del pueblo catalán se ha sentido descontenta con la deriva españolista que tomó el Estado durante los gobiernos del PP y cuando comprobó que los límites de autogobierno del anterior estatuto tocaban techo. Muchos catalanes que desean más poder para su comunidad ha visto en esa formación pragmática la más adecuada para elevar el techo del autogobierno sin renunciar por ello a la autodeterminación. Esa misma base social estima que las formaciones independentistas radicales mantienen posiciones en exceso intransigentes y que su falta de pragmatismo, su todo o nada, son estériles en un país donde la gran mayoría de los habitantes vota a partidos que apuestan por el catalanismo autonomista. Después de tres décadas de conquistas graduales y de crecimiento económico, el

independentismo radical, con discursos en ocasiones catastrofistas calcados del independentismo vasco, sigue fuera del parlamento catalán, al que incluso ha sido capaz de llegar un pequeño partido centralista como Ciutadans.

El resultado del referéndum celebrado en 2006 para un nuevo estatuto de autonomía ha favorecido el catalanismo elevando el techo de la soberanía. ERC y otras formaciones independentistas pidieron el voto negativo... y su apuesta fue derrotada con claridad, lo que demuestra que el Estado español ha sabido tener la suficiente flexibilidad como para asumir el deseo de más autogobierno de los catalanes, desactivando y haciendo prematura la demanda de autodeterminación. Quien puede hacer descarrilar hoy la convivencia de los catalanes en el seno de un Estado español profederal no es el independentismo, sino un poder judicial que bloquee el nuevo Estatut y una derecha política y mediática que no deja de provocar. Sin embargo, se ha podido ver también a lo largo de los dos últimos años la debilidad de las iniciativas españolistas en Cataluña: mera testimonialidad de Ciutadans, fracaso de la UPyD, marginalidad del PP e incapacidad para promover movilizaciones masivas en la calle para “defender” el español.

Aunque queda un difícil camino para que en el Parlamento de los Diputados se pueda hablar en catalán, por poner un ejemplo del trato desigual que siguen viviendo las lenguas minoritarias, es indudable que se profundiza en el autogobierno y que progresa el uso de la *llengua*. Así, el contexto en el que se encuentran en Cataluña los que luchan por el socialismo es propicio a colocar en un segundo plano las reivindicaciones nacionales y no contagiarse del maximalismo de los independentistas. Es el momento de afianzar un proyecto común con los que tienen aspiraciones socialistas en el resto del Estado y centrarse en las reivindicaciones sociales y ecologistas que superen las fronteras autonómicas.

Si Andalucía y Cataluña representan situaciones muy diferentes, también el País Vasco es caso aparte. Allí la mayoría de la población siente frustración ante un autogobierno que ha tocado techo y a cuyas demandas se dan respuestas judiciales y policiales. Pero a su vez el nacionalismo vasco es incapaz de superar su larga división entre los gradualistas del PNV-EA y los maximalistas del MLNV. Ante la evidencia de que Rodríguez Zapatero, escarmentado por los problemas de la anterior legislatura, no va a mover ficha, la izquierda abertzale se encastilla en el místico axioma de “resistir es vencer” y no rompe amarras ni con la autista estrategia de ETA, ni con el discurso territorial que hace de Navarra un escollo insalvable.

Es posible que en unas próximas elecciones autonómicas el nacionalismo pierda total o parcialmente las riendas del gobierno de Vitoria. Aunque a esta situación se llegue con la tramposa ilegalización de una parte del electorado, no es menos cierto que sigue habiendo quien cree en la máxima “cuanto peor, mejor”, la cual es una mala estrategia cuando se parte de una posición debilitada como la que tiene hoy la izquierda abertzale. En el conflicto vasco hace tiempo que se llegó a un callejón sin salida y, aunque sea legítima la demanda de un referéndum

de autodeterminación, la “vía catalana” —un nuevo estatuto que dé más autogobierno y permita avanzar hacia el estado plurinacional— aparece como la única salida factible a un escenario en el cual sólo está a gusto la derecha centralista.

Es indudable que los nacionalistas seguirán fascinados por utopías nacionales, pero no entiendo que organizaciones que se definen como socialistas deban hacer suyas esas aspiraciones plagadas de mitos, lo mismo que no hacen suyo el nacionalismo español. Cuando la mordaza franquista impedía conocer la opinión de la gente, era lógico que proyectos nacionales partidarios de agrupar distintas regiones se plantearan sin muchos matices, pero hoy, cuando hablamos de Navarra y aún más de Baleares o el País Valenciano, no podemos imponerles la nacionalidad vasca o catalana desconociendo tres décadas de pronunciamientos electorales. Si en Andalucía hubo importantes movilizaciones soberanistas desde la muerte de Franco hasta la consecución del Estatuto de Autonomía, no debemos menos que reconocer a la luz de los veintiséis años transcurridos desde entonces que los andaluces se dieron por satisfechos con su autogobierno y que los sentimientos protonacionales que entonces se percibieron no fraguaron en un sentimiento nacional. Ni Asturias, ni Aragón, ni las Islas Canarias han visto fraguar fuerzas auténticamente nacionalistas capaces de llevar su voz al parlamento. Y por el contrario, vemos como la amplia descentralización autonómica es utilizada en las comunidades gobernadas por el Partido Popular para dismantelar la educación y la sanidad públicas, o para boicotear medidas progresivas promovidas por el gobierno central, como las iniciativas de laicización. Para complicar el panorama en los tres últimos lustros ha habido una entrada masiva de emigrantes, los cuales suman un diez por ciento de la población y conservan intactas sus identidades culturales, planteando retos ante los cuales nuestras tradicionales utopías nacionales no ofrecen respuestas satisfactorias.

Hacia un Estado plurinacional. Es indudable que el gran problema de este Estado sigue siendo la fuerza de un nacionalismo centralista que, imbuido de chovinismo xenófobo, se disfraza con pretensiones de universalidad y cosmopolitismo para intentar imponer un modelo cultural heredero del nacional-catolicismo. Sin embargo, este españolismo no es tan homogéneo y dominante en el PP como pueda parecer, porque este partido también sufre tensiones regionalistas —véase lo ocurrido con Unión del Pueblo Navarro— y hay en su seno sectores más abiertos al diálogo con los nacionalistas. El PSOE, por su parte, constituye un microcosmos que va desde el españolismo centralista al federalismo. Todo esto, unido a la fuerza de los nacionalismos y regionalismos, a su vez divididos en estrategia y fines, ha permitido ir desarrollando un Estado que se aproxima a un federalismo en el que justamente las comunidades más nacionalistas tienen más autogobierno. Cierto que aún queda un trecho de camino por recorrer hasta que España sea plenamente un Estado plurinacional y haya un plurilingüismo en igualdad de condiciones. Cierto también

que el atrincheramiento de la derecha y su fuerza dentro de los aparatos del Estado y de los medios de comunicación oponen serias dificultades. Pero no olvidemos que desde la España franquista hasta la actual si alguien ha debido hacer concesiones y sumar derrotas ha sido el españolismo centralista.

Así, aún aceptando que vascos y catalanes son merecedores por su larga tradición de lucha del derecho de autodeterminación, opino que la correlación de fuerza hace ésta inviable y que, además, lo más deseable hoy es la consecución de un Estado plurinacional en el que lo mucho que hay en común tras siglos de historia compartida no sea ni coartada para establecer una tabla rasa cultural ni motivo de vergüenza. Aunque puede alegarse que modificar la Constitución, opción hoy bloqueada, es un paso ineludible para lograr un pleno Estado plurinacional, se sigue avanzando en la práctica hacia él y no queda en el terreno de lo utópico. No supondría tampoco cerrar el problema nacional en falso, sino tomar un camino acorde con un mundo en el que la inmensa mayoría de los Estados son plurinacionales, ya se estructuren de acuerdo a su realidad social o ya se empecinen en materializar, como Turquía, ese peligroso ideal nacido con las revoluciones burguesas y el romanticismo que es el Estado-nación. No olvidemos tampoco que un País Vasco o una Cataluña independientes no tendrían homogeneidad lingüística y étnica, de la misma manera que no la tienen los Estados nacidos de la desintegración de Yugoslavia y la Unión Soviética, en los que han aflorado una miríada de dramáticos conflictos étnicos.

Abandonar en la cuestión nacional las posiciones maximalistas para trasladar el problema al terreno de lo posible es una necesidad para la izquierda que aspira al socialismo. Con ello tendrá un mejor punto de partida para acometer sus prioridades, que pasan desde luego por extender la conciencia de clase por encima de las divisiones étnicas o nacionales.

Juanma Barrios es profesor de la Universidad de Granada.